

**ORDEN**

NÚMERO 0003/2025

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Expediente: 106/2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de Servicios denominado *“Atención residencial para menores con problemas de conducta y emocionales graves”* (2 lotes) a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuya adjudicación se efectuará mediante tramitación urgente por procedimiento negociado sin publicidad y mediante pluralidad de criterios al amparo de lo previsto en los artículos 131.2., 168 y 146.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

Marco normativo.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa, que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento de su objeto:

- La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título I, los principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores (artículo 39).

Corresponde a las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito territorial y conforme al artículo 148.1 de la Constitución Española, la competencia en materia de asistencia social.

- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que, en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, residenciándose en la Comunidad de Madrid en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, adoptándose por la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia las medidas de protección necesarias de los menores en situación de desamparo.

La actuación de los poderes públicos pivota sobre el principio rector de la supremacía del interés del menor. La segunda de las leyes mencionadas establece en sus artículos 56 y 63 que la tutela y la guarda podrán ejercerse por la Administración mediante la atención a los menores en centros residenciales.

Asimismo, su artículo 21, en la versión dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

- Aparte de lo anterior, es importante destacar que fue la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la que introdujo la primera regulación de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, y ello, tomando como referencia las Recomendaciones contenidas en el Informe sobre “Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social” del año 2009 y en el “Estudio sobre la escucha y el interés superior del menor, revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia del año 2014” del Defensor del Pueblo.

En concreto, en su artículo 26 se requiere autorización judicial para el ingreso y cese del menor en estos centros, mediante solicitud de la Entidad Pública de protección y el Ministerio Fiscal, debidamente motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores y en el que el menor tiene derecho a ser oído, debiendo pronunciarse la resolución sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles temporalmente el régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

- La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo artículo 4 c) establece la Promoción del buen trato al Niño, Niña y Adolescente como elemento central de todas las actuaciones.
- La Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, en su artículo 103.4 establece que los centros deberán cumplir con las medidas de control de calidad recogidas en la normativa vigente en materia de calidad y evaluación, entre ellas, los estándares de calidad que se prevean y en el art. 104.1 a) establece el objetivo de promover el cuidado en núcleos de convivencia reducidos, en los que los niños vivan en condiciones similares a las familiares, por lo que se trata de trasladar a los centros de protección los modelos familiares para adaptarse a sus necesidades.

Precisamente, en el apartado c) del precepto anterior, se recoge como principio de actuación que los centros de protección de menores observarán *“la especialización e individualización de la atención educativa en función de las necesidades y características de cada niño”*.

- El Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo, exige a las Residencias el desarrollo de las funciones de educación, y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6) y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en que ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.
- Con carácter general, es de aplicación la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

En los últimos años se ha podido constatar un cambio en el perfil de los menores que ingresan en los hasta ahora llamados “Centros de conducta”, muchos de ellos han vivido situaciones multi-traumáticas que han contribuido a generar los trastornos de comportamiento que manifiestan, y habitualmente a dichos trastornos están asociadas diversas patologías.

El cambio que están experimentando los perfiles de los menores que ingresan en los denominados centros de protección específicos, las características y las necesidades de éstos ~~NNA~~, obliga a realizar un proceso de adaptación a ellas. También se reseña que en los últimos años se han producido avances importantes en materia de menores y en el llamado Acogimiento Residencial Terapéutico (ART). Paralelamente, la regulación legislativa en materia de menores ha recogido y potenciado en sus textos la importancia de la calidad de la Atención Residencial.

En ocasiones, la problemática que presentan los menores puede provocar graves conflictos entre ellos. Para evitar el riesgo (entre otros) de ser víctima de agresiones por parte de los propios compañeros del centro residencial, es conveniente reducir el número de menores que residen en cada centro, máxime en los destinados a atender a niños cuyas particulares necesidades exigen una atención profesional especializada de carácter terapéutico.

La evidencia y el análisis de la realidad de los actuales centros específicos confirma que el tamaño de los centros, junto con el diseño y la aplicación de los procesos de intervención, son la clave para la mejora de la calidad, y para la consecución de los objetivos diseñados en los procesos de Acogimiento Residencial Terapéutico.

Por ello, se propone la licitación de este contrato de servicios de atención residencial para menores con “problemas de comportamiento y emocionales graves”, en el que los centros de atención residencial (a diferencia de contratos anteriores para menores con problemas de comportamiento) se conciben como unidades de convivencia, en los que convivirán grupos reducidos de menores, cuyas características serán las recogidas en cada lote de este contrato.

Además, estas unidades de convivencia permitirán agrupar a los menores por patologías y edades evolutivas similares, adaptando mejor el entorno terapéutico a sus necesidades lo que redundará en la mejora de la calidad de la atención residencial, objetivo prioritario de esta DGIFFN.

Por todo ello, teniendo en cuenta la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a estos menores, se hace necesario ofrecer una solución estable que dé respuesta a esta necesidad social y la solución viene por la convocatoria de una licitación para la gestión de dos centros o unidades de convivencia, con una capacidad global de 37 plazas frente al anterior modelo de único inmueble.

La formalización del contrato con las características propuestas presenta importantes ventajas, en concreto:

Respecto a la prestación del servicio.

- La configuración actual del servicio en dos lotes obedece, por un lado, a la especialización respecto al contrato del que este trae origen, de los perfiles de los menores beneficiarios del servicio, prolijamente descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato y, por otro lado, cumple con el principio de desinstitucionalización, preconizado por el artículo 104 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, promoviendo así el cuidado en núcleos de convivencia reducidos.
- Se da al recurso, como prestación que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, cierta estabilidad dentro del marco de la LCSP, con una duración de dos años prorrogables por otros dos.

Respecto al presupuesto de licitación.

- El presupuesto de licitación del contrato tiene su base en los precios de contratos licitados recientemente para plazas de acogimiento residencial de menores con medida de protección y en todo caso, conforme al precio real del mercado.
- Se considera que el presupuesto de licitación está equilibrado respecto al precio real de mercado de las plazas de acogimiento residencial, lo que permitirá obtener una mayor concurrencia a efectos de su adjudicación y evitar desistimientos en su ejecución.

Con el objeto del presente contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato de servicios para la gestión de tres dispositivos para el acogimiento residencial de adolescentes atendidos, con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (2 LOTES), por procedimiento negociado sin publicidad.

Madrid, a fecha de firma	<p>LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023) EL VICECONSEJERO</p> <p>Firmado digitalmente por: GOMEZ-TAVIRA GOMEZ-TAVIRA PABLO Fecha: 2025.01.07 10:11</p> <p>Fdo.: Pablo Gómez-Tavira Gómez-Tavira</p>
--------------------------	--